

Santiago, veintidós de octubre de dos mil veintiuno.

**Vistos:**

En los autos Rol N° 13.364-19 instruidos por el Ministro en visita extraordinaria Sr. Mario Carroza Espinoza, por sentencia de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, se condenó a Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, como autor del delito de homicidio calificado de Juan Antonio Díaz Cliff, ocurrido en Santiago el día 18 de abril de 1986, a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales; a Jorge Enrique Jofré Rojas, Víctor Eulogio Ruiz Godoy, José Guillermo Salas Fuentes y Carlos Enrique Palma López, en calidad de autores del mismo delito, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales; y, a Eduardo Avelino Fuenzalida Pérez y Ema Ceballos Núñez, en calidad de encubridores de dicho ilícito, a la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, más accesorias legales.

Recurrida dicha sentencia, la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, la confirmó, con las siguientes declaraciones: que Álvaro Corbalán Castilla, Jorge Jofré Rojas, Víctor Ruiz Godoy, José Salas Fuentes y Carlos Palma López quedan condenados a las penas impuestas en la sentencia de primer grado como autores del delito de homicidio calificado de Juan Antonio Díaz Cliff, cometido el 18 de abril de 1986, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1, circunstancias primera y quinta del Código Penal; y que Eduardo Fuenzalida Pérez y Ema Ceballos Núñez quedan condenados a sendas penas de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales, como cómplices del delito antes referido



Contra esa sentencia se formularon recursos de casación en la forma por el representante del Programa de Derechos Humanos, y de casación en el fondo por dicha parte, por las defensas de Fuenzalida Pérez, Ruiz Godoy, Ceballos Núñez, Jofré Rojas, Palma López y Salas Fuentes, y asimismo, por la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, ordenándose traerlos todos en relación.

**Y considerando:**

1º) Que, en primer término, se dedujo recurso de casación en la forma por el Programa de Derechos Humanos, fundado en la causal 9ª del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, en relación los requisitos 4º y 5º del artículo 500 del mismo cuerpo legal.

Explica el recurrente que la sentencia impugnada califica la minorante del artículo 11 N° 6 del Código Penal en favor de algunos de los condenados, no obstante que reproduce el considerando 31º del fallo de primer grado, que señala, al reconocer dicha atenuante, *“sin calificación por no haber mérito para ello.”* Agrega que el fundamento del tribunal de alzada para calificar la mencionada modificatoria dice relación con cuestiones que escapan de la irreprochable conducta anterior, como la edad de los acusados y la jerarquía que tenían dentro del aparato represivo de la CNI.

Pide se declare la nulidad de la sentencia recurrida y se dicte una de reemplazo que condene a los acusados a las penas que corresponden, sin considerar a la atenuante de irreprochable conducta anterior como muy calificada.

2º) Que el Programa de Derechos Humanos igualmente deduce recurso de casación en el fondo, por las causales primera y séptima del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 11 N° 6, 68, 68 bis y



69 del Código Penal.

Señala que el tribunal de alzada, para calificar la atenuante de irreproachable conducta anterior en favor de algunos de los condenados, razona en torno a cuestiones que se alejan del parámetro legal establecido para dicha determinación, las que ni siquiera están respaldadas por prueba suficiente en autos.

Solicita invalidar la sentencia impugnada y que en la de reemplazo se declare que los responsables no serán beneficiados con la calificación de la atenuante de irreproachable conducta anterior, fijando las penas privativas de libertad en los marcos punitivos que corresponden en derecho.

**3º)** Que se ha interpuesto recurso de casación en el fondo por la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos por la causal primera del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, por infracción de los artículos 68 bis, en relación al artículo 11 N° 6, ambos del Código Penal, toda vez que la sentencia impugnada consideró la circunstancia atenuante prevista en el artículo 11 N° 6 del Código Penal como muy calificada, no obstante que en el proceso no obran antecedentes que permitan así decidirlo.

Pide anular el fallo recurrido y en el de reemplazo condenar a Jofré Rojas, Ruiz Godoy, Salas Fuentes, Palma López, Fuenzalida Pérez y Ceballos Núñez, al máximo de las penas privativas de libertad aplicables.

**4º)** Que se ha formulado recurso de casación en el fondo por la defensa de Víctor Ruiz Godoy, por las causales primera y séptima del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, por infracción de *“las normas reguladoras de la prueba en específico con infracción al Título cuarto del Libro segundo del Código de*



*Procedimiento Penal, que trata de la prueba y del modo en que ella debe ser apreciada (Artículos 451 a 488)”, y de los artículos 10 N° 9 y 10, 11 N° 6 y 103 del Código Penal.*

Expresa que el auto de procesamiento y posterior acusación no permiten que el Tribunal adquiriera una plena y absoluta convicción de que Ruiz Godoy haya tenido el grado de participación de autor, cómplice o encubridor en el delito imputado. Añade que se infringen las normas reguladoras de la prueba, ya que no se logró acreditar que Ruiz Godoy haya tenido control alguno sobre los hechos que se le atribuyen.

Sobre la eximente del artículo 10 N° 9 del Código Penal, señala que las órdenes recibidas por la autoridad competente de la época, no podían sino ser acatadas, y respecto de la del artículo 10 N° 10 del mismo código, refiere que Ruiz Godoy solo seguía órdenes provenientes de los cabecillas de los distintos grupos de la CNI. Protesta también el arbitrio por no acoger el fallo la rebaja prevista en el artículo 103 del Código Penal.

Finaliza solicitando que se invalide el fallo atacado y se dicte el correspondiente de reemplazo que rebaje la pena.

**5°)** Que igualmente se ha interpuesto recurso de casación en el fondo por el apoderado de Eduardo Fuenzalida Pérez, por la causal del N° 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, por infracción de los artículos 481, 482 y 488 N° 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 16, 17 y 391 del Código Penal, en síntesis, porque no se ha acreditado la participación de Fuenzalida Pérez en el delito reprochado, desde que los elementos probatorios de autos no son suficientes para poder incriminarlo.



Solicita invalidar el fallo recurrido y en el de reemplazo absolver a Fuenzalida Pérez.

6º) Que en idénticos términos, se han deducido sendos recursos de casación en el fondo en favor de Jorge Jofré Rojas, Carlos Palma López y José Salas Fuentes, por la causal 1a del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, por errónea aplicación de los artículos 68 y 103 del Código Penal y 211 y 214 del Código de Justicia Militar, por cuanto el fallo impugnado omite considerar la atenuante de media prescripción.

Pide anular la sentencia y en la de reemplazo imponer a los encartados una pena de tres años y un día de presidio menor, otorgándoles el beneficio de la libertad vigilada.

7º) Que, finalmente, se ha formulado recurso de casación en el fondo por la defensa de Ema Ceballos Núñez, por la causal del N° 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, por vulneración de los artículos 68 y 103 del Código Penal, al no estimarse concurrente la atenuante calificada contemplada en el citado artículo 103.

Solicita anular el fallo impugnado y en el de reemplazo considerar las atenuantes de los artículos 211 y 214 del Código de Justicia Militar y las muy calificadas derivadas del artículo 103 del Código Penal, para en definitiva condenar a Ceballos Núñez a una pena no superior a la de presidio menor en su grado medio, con beneficios de la Ley N° 18.216.

**En cuanto al recurso de casación en la forma:**

8º) Que, como ya se dijo, el Programa de Derechos Humanos dedujo recurso de casación en la forma, fundado en la 9ª causal del artículo 541 del



Código de Procedimiento Penal, en relación los requisitos 4º y 5º del artículo 500 del mismo cuerpo legal, por cuanto la sentencia impugnada califica la minorante del artículo 11 N° 6 del Código Penal en favor de algunos de los condenados, no obstante que reproduce el considerando 31º del fallo de primer grado, que señala, al reconocer dicha atenuante, *“sin calificación por no haber mérito para ello.”*

**9º)** Que en relación al vicio denunciado se hace necesario subrayar que el legislador se ha preocupado de establecer las formalidades a que deben sujetarse las sentencias definitivas de primera o única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales; las que, además de satisfacer los requisitos exigibles a toda resolución judicial, en materia criminal deben contener las enunciaciones contempladas en el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, entre las que figuran –en lo que atañe al presente recurso- en sus numerales 4º y 5º, *“Las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o por no probados los hechos atribuidos a los procesados; o los que éstos alegan en su descargo, ya para negar su participación, ya para eximirse de responsabilidad, ya para atenuar ésta”* y *“Las razones legales o doctrinales que sirven para calificar el delito y sus circunstancias, tanto las agravantes como las atenuantes, y para establecer la responsabilidad o la irresponsabilidad civil de los procesados o de terceras personas citadas al juicio, las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia”*.

**10º)** Que la exigencia de motivar o fundamentar las sentencias no sólo dice relación con un asunto exclusivamente procesal referido a la posibilidad de recurrir, sino que también se enmarca en la necesidad de someter al examen que puede hacer cualquier ciudadano de lo manifestado por el juez y hace posible,



asimismo, el convencimiento de las partes en el pleito, evitando la impresión de arbitrariedad al tomar éstas conocimiento del porqué de una decisión judicial, formando parte la fundamentación adecuada de las resoluciones judiciales de la garantía del debido proceso.

11º) Que se ha entendido que la causal de nulidad en examen concurre cuando el vicio consiste en la falta de consideraciones de hecho o de derecho, situación que se produce, de igual manera, cuando entre sí esas consideraciones son contradictorias o se destruyen unas a otras, situación que se advierte del estudio de los antecedentes.

En efecto, la sentencia de primer grado, en su motivo 31º, luego de reconocer la atenuante de irreprochable conducta anterior a todos los acusados, señala *“sin calificación por no haber mérito para ello”*, mientras que el fallo de alzada, que reproduce el del *a quo* sin eliminar o modificar dicha afirmación, en su basamento 13º expresa lo siguiente: *“Que dicho lo anterior, no es posible soslayar que los acusados Jofré Rojas, Ruiz Godoy, Salas Fuentes y Palma López eran suboficiales del Ejército, mientras que Ema Ceballos Núñez, administrativo de la Armada en grado de marinero 2º, que fueron destinados a cumplir funciones – cuando ninguno de ellos sobrepasaba los 30 años– a la Central Nacional de Informaciones, organismo en el cual su jerarquía era de subordinados cuya capacidad de resistencia o desobediencia era reducida.*

*Tratándose de un órgano represor que de manera sistemática incurría en la perpetración de delitos, donde los sentenciados antes individualizados tenían escasas posibilidades para rechazar su comisión o de abstenerse de obrar mal, hay motivos para suponer que la ejecución de este ilícito se vio propiciada por*



*circunstancias extraordinarias que alteraron la capacidad de autodeterminarse y, por ende, es factible ponderar la atenuante de irreprochable conducta que les favorece como muy calificada.”*

**12°)** Que al reproducir la sentencia en análisis el motivo 31° del fallo de primer grado, pasa éste a formar parte de aquélla, lo que importa que la misma resolución afirma por un lado que no hay mérito para acoger la calificación de la minorante de irreprochable conducta anterior y, por otro, que sí lo hay entregando razones para así sostenerlo, antinomia que en definitiva priva de fundamento a esta parte del fallo, impidiendo que cualquier ciudadano, y especialmente los familiares de la víctima de autos, pueda comprender el motivo por el cual los sentenciadores acogen la pretendida calificación y aplican la consiguiente rebaja punitiva.

**13°)** Que es manifiesto, entonces, que la sentencia cuestionada contiene motivaciones antagónicas que no pueden coexistir, lo que conduce a la anulación de esos razonamientos, quedando desprovisto el fallo, en lo referido a la calificación de la minorante del artículo 11 N° 6 del Código Penal y la rebaja de un grado de la pena a los acusados, de la fundamentación exigida en el artículo 500 N° 4 y 5 del Código de Procedimiento Penal, con lo cual se configura el vicio de casación formal previsto en el N° 9 del artículo 541 del referido cuerpo legal, vicio que, además, ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, pues de no haberse cometido, la pena no podría haberse rebajado en un grado al concurrir en favor de todos los acusados sólo una circunstancia atenuante, razón por la que el recurso será acogido.

**En cuanto a los recursos de casación en el fondo:**





**14°)** Que sobre el recurso de casación en el fondo planteado por el Programa de Derechos Humanos, atendido lo resuelto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 808 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en esta materia por disposición del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, se tendrá por no interpuesto.

**15°)** Que respecto del recurso de casación en el fondo deducido por la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, dado que por éste se denuncia el mismo error de derecho que funda el recurso de casación en el fondo del Programa de Derechos Humanos que se tuvo por no interpuesto y que igualmente está engarzado al vicio que dio lugar a la nulidad de forma, tampoco se emitirá pronunciamiento sobre aquél, sin perjuicio que esta Corte, de conformidad al inciso 3° del artículo 544 del mismo código, actuando como tribunal de alzada, dictará la sentencia de reemplazo *“que crea conforme a la ley y al mérito del proceso”*, oportunidad en que enmendará, si fuera el caso, los errores de derecho acusados en aquellos arbitrios de fondo.

**16°)** Que el recurso de casación en el fondo interpuesto por la defensa de Víctor Ruiz Godoy, se basa en las causales primera y séptima del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal.

En cuanto a la causal séptima del artículo 546, el recurso nada más alude genéricamente a *“las normas reguladoras de la prueba en específico con infracción al Título cuarto del Libro segundo del Código de Procedimiento Penal, que trata de la prueba y del modo en que ella debe ser apreciada (Artículos 451 a 488)”*, sin precisar a qué norma en particular apunta del conjunto al que alude, y de qué forma concreta se ha producido su errónea aplicación, omisión que impide



siquiera el estudio de lo alegado mediante esta causal y, de ese modo, no pudiendo alterarse los hechos establecidos en la instancia, ellos resultan suficientes para establecer la participación de Ruiz Godoy como autor del artículo 15 N° 1 del Código Penal, norma cuya infracción el arbitrio, además, ni siquiera denuncia.

**17°)** Que en lo concerniente a la falta de aplicación del artículo 10 N° 9 del Código Penal, la sentencia no ha dado por demostrada ninguna circunstancia que pueda calificarse como una fuerza irresistible o causante de un miedo insuperable que haya violentado o impulsado la conducta de Ruiz Godoy que se le imputa, sobretodo considerando que en la sentencia de reemplazo que se dictará, el considerando 13° del fallo en estudio será eliminado.

De la misma manera, en lo tocante a la eximente del artículo 10 N° 10 del Código Penal, no se ha establecido ni podría tampoco establecerse, la existencia de algún deber reconocido por el ordenamiento jurídico vigente a la sazón, que comprendiera el de dar muerte, o colaborar con ello, a conciudadanos únicamente por ser opositores al régimen dictatorial imperante a la época, ni menos podría pretenderse catalogar ello como el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo.

En lo referido al artículo 214 del Código de Justicia Militar, este precepto es aludido en el recurso mas no se desarrolla la forma en que se habría producido su errada aplicación, razón suficiente para desestimar este reclamo.

**18°)** Que en cuanto se protesta por no dar lugar a la rebaja de pena por prescripción gradual del artículo 103 del Código Penal, sin perjuicio de lo razonado por la sentencia de primera instancia en sus basamentos 29° y 30° y en el 10° de



la recurrida, que esta Corte comparte, cabe añadir que la calificación de crimen contra la humanidad dada al hecho ilícito cometido en ese mismo basamento, obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuentemente, contrarios a las regulaciones de *ius cogens* provenientes de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo.

Pero junto con ello, debe subrayarse que cualquiera sea la interpretación que pueda hacerse del fundamento del precepto legal en discusión, es lo cierto que las normas a las que se remite el artículo 103, otorgan una mera facultad al juez y no le imponen la obligación de disminuir la cuantía de la pena aunque concurren varias atenuantes, por lo que los vicios denunciados carecen de influencia sustancial en lo dispositivo del fallo impugnado.

**19°)** Que atendido lo razonado en los motivos precedentes, debe desestimarse también la causal primera del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal y, en definitiva, rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido por la defensa de Ruiz Godoy.

**20°)** Que los recursos de casación en el fondo interpuestos en favor de Jorge Jofré Rojas, Carlos Palma López, José Salas Fuentes y Ema Ceballos Núñez, en tanto reclaman que el fallo impugnado omite considerar la atenuante de media prescripción, serán desestimados por los motivos expresados en el motivo



18° precedente.

Los tres primeros recursos sostienen igualmente el quebrantamiento de los artículos 211 y 214 del Código de Justicia Militar, sin embargo, no manifiestan en qué consiste ese supuesto error, lo que obsta para su examen.

Por tales razones los arbitrios enunciados en este basamento serán rechazados.

**21°)** Que el recurso de casación en el fondo que formula el apoderado de Eduardo Fuenzalida Pérez, se afinsa en la causal del N° 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, por infracción de los artículos 481, 482 y 488 N° 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 16, 17 y 391 del Código Penal, en síntesis, porque no se ha acreditado la participación de Fuenzalida Pérez en el delito reprochado, desde que los elementos probatorios de autos no son suficientes para poder incriminarlo.

**22°)** Que Fuenzalida Pérez, en sus declaraciones de fs. 1096 y 1144, admite haber trasladado en un vehículo a parte de los agentes que acometen a Díaz Cliff, a las cercanías del lugar en que ello ocurre, y llevarlos a su cuartel una vez que se ha logrado dicho objetivo, pero arguye ignorancia del acto que ellos ejecutarían.

Sin embargo, el fallo impugnado contiene distintos indicios que cumplen los extremos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, que permiten tener por demostrado el conocimiento de las acciones a las que Fuenzalida Pérez colaboró. En efecto, no puede perderse de vista que en las mismas declaraciones ya aludidas éste explica que formaba parte de la CNI desde aproximadamente dos años antes de este delito, al mando de Álvaro Corbalán, integrando la Brigada



Azul, grupo operativo dedicado a asuntos relacionados al MIR. Por otra parte, Elizabeth Castro Carmona, a fs. 321 (117) y copia de declaración judicial de fs. 39 contenida en custodia N° 128-2012, correspondiente a causa Rol N° 30.369-91, manifiesta que se enteró que su casa -donde arrendó una pieza Díaz Cliff- había sido vigilada por individuos de civil en auto y furgones desde hacía por lo menos tres meses, vigilancia y seguimiento que por lo demás es concordante con lo expresado por diversos acusados, incluso el propio Fuenzalida Pérez.

**23°)** Que en ese orden, su extendida pertenencia previa a la CNI, sirve de base para concluir que Fuenzalida Pérez no podía desconocer la naturaleza de las actividades criminales que llevaban a cabo a diario los agentes que como él, y con él, servían para dicha organización, en especial, contra militantes del MIR, como era el caso de Díaz Cliff, a lo que se suma el extenso seguimiento y persecución que realizan en conjunto todos los agentes -incluido Fuenzalida Pérez-, armados algunos de ellos y sirviéndose de vehículos y sus conductores para que les dieran una vía de escape inmediata luego de ejecutar el delito en la vía pública, lo que da cuenta de preparación, organización y coordinación de parte de todos los involucrados.

**24°)** Que, de esa manera, los indicios reseñados facultan a los sentenciadores para concluir en el considerando 9° del fallo en estudio, que Fuenzalida Pérez, al igual que Ceballos Núñez, *“no podían menos que conocer el plan que se estaba desplegando, al haber sido planificado por un organismo de inteligencia al que pertenecían, colaborando en su perpetración de acuerdo a la función que se les asignó”*, lo que encuadra en la complicidad que regula el artículo 16 del Código Penal, pues colaboró dolosamente, por actos anteriores y



simultáneos, a dar muerte a Díaz Cliff, al trasladar al lugar a los ejecutores y asegurarles, mientras y hasta la consumación del delito, que contarían con un móvil a su disposición que les facilitaría su inmediata huida, tal como ocurrió.

**25°)** Que al ser las presunciones judiciales arriba enunciadas múltiples y basadas en hechos reales y probados, no se ha cometido error en la aplicación de los números 1 y 2 del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal al tener por acreditado el actuar doloso de Fuenzalida Pérez y, consiguientemente, tampoco de los artículos 16 y 391 del Código Penal, no teniendo influencia en lo dispositivo las demás normas cuya infracción se acusa.

**26°)** Que por todo lo dicho, el arbitrio interpuesto en favor de Fuenzalida Pérez tampoco podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 808 del Código de Procedimiento Civil, 500 N° 4 y 5, 535, 541 N° 9, 544 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se declara:

I. **Se acoge** el recurso de casación en la forma deducido en representación del Programa de Derechos Humanos en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, la que se anula, y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

II. **Se tienen por no interpuestos** los recursos de casación en el fondo deducidos por el Programa de Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos contra la misma sentencia.



**III. Se rechazan** los arbitrios de casación en el fondo presentados por las defensas de Fuenzalida Pérez, Ruiz Godoy, Ceballos Núñez, Jofré Rojas, Palma López y Salas Fuentes, contra el fallo previamente indicado.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos.

Rol N° 13.364-19.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., el Ministro Suplente Sr. Roberto Contreras O., y las Abogadas Integrantes Sras. María Cristina Gajardo H., y Carolina Coppo D. No firma el Ministro Suplente Sr. Contreras, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber concluido su período de suplencia.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA  
REBOLLEDO  
MINISTRO  
Fecha: 22/10/2021 14:59:26

LEOPOLDO ANDRES LLANOS  
SAGRISTA  
MINISTRO  
Fecha: 22/10/2021 13:11:38

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 22/10/2021 14:59:27

CAROLINA ANDREA COPPO DIEZ  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 22/10/2021 14:46:00



Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN  
MINISTRO DE FE  
Fecha: 22/10/2021 15:13:44

En Santiago, a veintidós de octubre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN  
MINISTRO DE FE  
Fecha: 22/10/2021 15:13:44





Santiago, veintidós de octubre de dos mil veintiuno.

En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 544 del Código de Procedimiento Penal, y lo ordenado por la decisión precedente, se dicta el fallo de reemplazo del que se ha anulado en estos antecedentes.

**Vistos:**

Se reproduce la sentencia de primer grado de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, pero se eliminan los motivos 28° y 35°, y del párrafo tercero del considerando 14° la frase “*pero no un homicidio, como finalmente acontece*”. Asimismo, en el motivo 15° se sustituye el enunciado “*encubridores del artículo 17 del mismo cuerpo legal*” por “*cómplices del artículo 16 del mismo cuerpo legal*”, y en el basamento 33° se suprime la expresión “*con posterioridad*” y se reemplaza el término “*encubridora*” por “*cómplice*”.

Igualmente, del fallo casado de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se reiteran sus considerandos 1° a 12°, y en el 9° se sustituye la frase “*comparte lo dictaminado por el Fiscal Judicial de no considerar*” por “*no considerará*”.

**Y teniendo, además, presente:**

1°) Que al momento de determinar la pena de los acusados Jofré Rojas, Ruiz Godoy, Salas Fuentes y Palma López en calidad de autores, se tendrá presente que el delito de homicidio calificado tenía una pena –a la época de los hechos– de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo, y concurriendo una atenuante y ninguna agravante, de conformidad al artículo 68, inciso 2°, del Código Penal, no debe aplicarse el máximo grado señalado, resultando un marco penal de presidio mayor en sus grados medio a máximo, fijándose la pena en el primero de ellos.



En lo atinente a los encartados Fuenzalida Pérez y Ceballos Núñez, habiendo éstos intervenido en calidad de cómplices habrá de rebajarse en un grado dicho marco punitivo, quedando en presidio mayor en su grado mínimo, y beneficiándoles una atenuante y ninguna agravante, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 67 del Código Penal, se aplicará en su *mínimum*.

2°) Que por lo razonado, se discrepa parcialmente del Informe del Fiscal Judicial, en cuanto sugiere calificar la minorante de irreprochable conducta anterior en favor de los acusados, salvo respecto de Corbalán Castilla.

Por estas consideraciones, y de conformidad además con lo dispuesto en los artículos 510 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, **se confirma** la sentencia apelada de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, con las siguientes declaraciones:

I.- Que Álvaro Corbalán Castilla, Jorge Jofré Rojas, Víctor Ruiz Godoy, José Salas Fuentes y Carlos Palma López quedan condenados a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa, como autores del delito de homicidio calificado de Juan Antonio Díaz Cliff, cometido el 18 de abril de 1986, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1, circunstancias primera y quinta del Código Penal.

II.- Que Eduardo Fuenzalida Pérez y Ema Ceballos Núñez quedan condenados a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios



públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa, como cómplices del delito antes referido.

III.- Que atendido el cuántum las penas corporales impuestas, todos los sentenciados deberán cumplirlas de manera efectiva, sirviéndoles de abonos los tiempos que permanecieron privados de libertad y que se les han reconocido en el fallo de primera instancia.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos.

Rol N° 13.364-19.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., el Ministro Suplente Sr. Roberto Contreras O., y las Abogadas Integrantes Sras. María Cristina Gajardo H., y Carolina Coppo D. No firma el Ministro Suplente Sr. Contreras, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber concluido su período de suplencia.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA  
REBOLLEDO  
MINISTRO  
Fecha: 22/10/2021 14:59:27

LEOPOLDO ANDRES LLANOS  
SAGRISTA  
MINISTRO  
Fecha: 22/10/2021 13:11:39



MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 22/10/2021 14:59:28

CAROLINA ANDREA COPPO DIEZ  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 22/10/2021 14:46:01



Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN  
MINISTRO DE FE  
Fecha: 22/10/2021 15:13:45

En Santiago, a veintidós de octubre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN  
MINISTRO DE FE  
Fecha: 22/10/2021 15:13:45

